



## SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Ejecutivo singular
DEMANDANTE	Diego Alejandro López Londoño
DEMANDADO	Disaypro Diseño y Desarrollo de Proyectos S.A.S.
RADICADO	05001 31 03 009 2020 00018 01
DECISIÓN	Confirma auto apelado

Medellín, veinte de febrero de dos mil veintitrés

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por los opositores a la diligencia de secuestro en el asunto de la referencia.

### ANTECEDENTES

1.1. En diligencia de 10 de noviembre de 2022, el Juzgado 009 Civil del Circuito de Medellín resolvió los incidentes de oposición al secuestro de los bienes embargados en el proceso de marras, propuestos por Disaypro Diseño y Desarrollo de Proyectos S.A.S. a nombre de la sociedad Blanccastel S.A.S. y, C.I. Bodegas Alicante S.A.S., de manera desfavorable y condenó en costas a los opositores.

Como fundamentos de la decisión, el despacho de primer nivel señaló que los requisitos de la oposición a la diligencia de secuestro se encontraban establecidos en el numeral 2 del artículo 596 y en el artículo 309 del Código General del Proceso. Al respecto, señaló que quien pretenda oponerse al secuestro de bienes debía ostentar el poder sobre la cosa al momento de la diligencia; el opositor debe ser ajeno a la relación jurídico sustancial que se debate en el proceso, es decir, que no sea demandante ni demandado; que en el escrito o al momento en que alegue la oposición, la fundamente en hechos constitutivos de posesión; que presente prueba siquiera sumaria que demuestre la posesión material sobre el bien secuestrado; y que en caso de ser el tenedor quien alega la posesión de otro, demuestre la posesión material de este y la tenencia de su parte.

Respecto del régimen probatorio señaló que cuando se cita a una parte o a un tercero, como en este caso a los opositores en el proceso y en concreto para absolver el interrogatorio del incidente de oposición, si no comparecen es

aplicable la sanción que el legislador estableció por desatender dicha cita, que se concreta en tener por cierto que el opositor no es poseedor, conforme el numeral 6 del artículo 191 ibídem, dispone. Lo anterior debido a que, Blanccastel S.A.S. y Disaypro S.A.S. no estuvieron presentes en la diligencia de práctica de interrogatorios de parte. Adicionalmente, la falladora hizo unas precisiones respecto del contrato de leasing y refirió que conforme con el artículo 2 del Decreto 913 de 1993 el leasing es una operación de arrendamiento financiero que consiste en *"la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de compra, en consecuencia, el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio que conservará, hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. Así mismo debe entenderse que el costo del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de duración del contrato generando la respectiva utilidad"*.

Así las cosas, determinó que frente a la oposición formulada por Disaypro S.A.S. a nombre de la sociedad Blanccastel S.A.S. de quien predica ser la propietaria de 26 elementos o bienes discriminados en la lista presentada en el incidente y respecto de los cuales se dijo en el escrito que el motivo por el cual esos bienes se encontraban en la bodega ubicada en Las Palmas a 200 metros de la glorieta del aeropuerto José María Córdoba, obedecía a una relación contractual de carácter verbal entre las sociedad demandada y Blanccastel S.A.S., no era una afirmación que pretendía demostrar la posesión, sino la propiedad de los bienes muebles y que, si Disaypro S.A.S. promovió incidente en favor de Blanccastel S.A.S. debió probar la condición de tenedora, sin embargo, tales aspectos no quedaron verificados, máxime que las sociedades ni siquiera se presentaron a absolver el interrogatorio, por lo que se presume que no son ni poseedoras ni tenedoras; de igual modo, la juez sostuvo que no existía elementos de prueba que permitieran predicar que las empresas llevaban a cabo actos de señor y dueño sobre esos bienes, ni cuál era la forma en que los aprovechaban. Frente a la prueba documental aportada (facturas) concluyó que estas no acreditaban la propiedad, menos la posesión, pues tales documentos estaban suscritos en un idioma diferente al español y no se trajo la traducción, por lo cual, no tenían validez probatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 251 del C.G.P.

Ahora, en relación con la oposición incoada por la entidad C.I. Bodegas Alicante S.A.S. apuntó que era necesario que, al momento de la diligencia de secuestro,

la opositora certificara que los bienes objeto de la medida se encontraban en su poder, así la tenencia la tuviese un tercero. Expuso que en el interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la sociedad opositora, se dejó en claro que esos bienes no estaban en su poder, que era otra sociedad la que los detentaba y concretamente la tenencia de esa maquinaria estaba en cabeza de la empresa demandada, pues tanto en el escrito de oposición como en el interrogatorio, se expuso que la tenencia la ostentaba Disaypro S.A.S. en virtud de un contrato que consistía en un proyecto en que Disaypro se comprometía a entregar un producto final, sin embargo, dicho acuerdo se incumplió. Con todo, la juzgadora anotó que ello no demostraba actos de posesión de la opositora. Así mismo, afirmó que junto con el escrito de oposición se allegó un contrato de compraventa que eventualmente serviría para probar las relaciones comerciales entre Disaypro S.A.S. y C.I. Bodegas Alicante S.A.S., con una vigencia de 3 meses, que fenecieron antes de la diligencia de secuestro, y si bien se arrimó unos otrosí, estos no permitían corroborar de manera clara que pertenecían al contrato inicial, máxime que ahí no se hizo referencia a la ampliación del término que se estableció previamente, menos eran claros en probar cuáles eran esos actos de posesión que la opositora ejercía sobre los bienes secuestrados. Por otra parte, expuso que, de acuerdo con el interrogatorio rendido por la representante legal de la opositora, se evidenció que existía diferencias entre los bienes reclamados y lo realmente secuestrado, como ocurría con la torre de carbonatación y la llenadora lineal. Finalmente indicó que revisado el contrato de leasing suscrito entre C.I. Bodegas Alicante S.A.S. y el Banco de Occidente, se caía por su propio peso esa presunta condición de propietaria.

1.2. Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la opositora C.I. Bodegas Alicante S.A.S. interpuso recurso de apelación con el fin de que la providencia impugnada fuera revocada y en su lugar, se accediera a la oposición formulada.

Con tal fin, adujo que debía estudiarse la propiedad de la sociedad Disaypro S.A.S. sobre muchos de los elementos secuestrados, más allá de discutir si sobre ellos había "*pertenencia*" de C.I. Bodegas Alicante S.A.S. o del Banco de Occidente, pues en efecto quedó claro que esos bienes no son de propiedad de Disaypro S.A.S. Por otro lado, arguyó que existía un contrato de compraventa previo a la diligencia de secuestro, empero no hubo entrega de los bienes ahí relacionados. Aunado a ello, señaló que existe 2 bienes reclamados en oposición que sí coinciden con los bienes secuestrados, que son, la torre de carbonatación y la llamada llenadora lineal.

1.3. Surtido el traslado respectivo, la parte ejecutante se pronunció y solicitó mantener incólume la decisión. Como cimienta de lo pretendido sostuvo que el primer reparo el cual estaba dirigido a indicar que Disaypro S.A.S. tenía maquinaria ajena en sus bodegas, no deja de ser más que una hipótesis, cuyo objeto no es el presente incidente, pues este trámite buscaba el levantamiento de las medidas cautelares, el cual requería que fuera alegado por un poseedor o un tenedor a nombre del poseedor, por lo que este reparo no tendría relevancia. Respecto de la supuesta coincidencia de las dos máquinas que están en el listado de la oposición, con el acta de secuestro, indicó que no existía prueba de ninguno de los supuestos que exige el ordenamiento para que prosperara el incidente de oposición. En suma, como bien definió la falladora, C.I Bodegas Alicante S.A.S. no es ni propietaria ni poseedora. Finalmente, apuntó que existía irregularidades frente a la identificación de los bienes reclamados en oposición.

#### CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 596 del Código General del Proceso establece la figura de oposición al secuestro. Al respecto señala:

*"ARTÍCULO 596. OPOSICIONES AL SECUESTRO. A las oposiciones al secuestro se aplicarán las siguientes reglas:*

*1. Situación del tenedor. Si al practicarse el secuestro los bienes se hallan en poder de quien alegue y demuestre título de tenedor con especificación de sus estipulaciones principales, anterior a la diligencia y procedente de la parte contra la cual se decretó la medida, esta se llevará a efecto sin perjudicar los derechos de aquel, a quien se prevendrá que en lo sucesivo se entienda con el secuestro, que ejercerá los derechos de dicha parte con fundamento en el acta respectiva que le servirá de título, mientras no se constituya uno nuevo.*

*2. Oposiciones. A las oposiciones se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en relación con la diligencia de entrega.*

*3. Persecución de derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta. Levantado el secuestro de bienes muebles no sujetos a registro quedará insubsistente el embargo. Si se trata de bienes sujetos a aquel embargados en proceso de ejecución, dentro de los tres (3) días*

*siguientes a la ejecutoria del auto favorable al opositor, que levante el secuestro, o se abstenga de practicarlo en razón de la oposición, podrá el interesado expresar que insiste en perseguir los derechos que tenga el demandado en ellos, caso en el cual se practicará el correspondiente avalúo; de lo contrario se levantará el embargo”.*

2.2. Por su parte, el artículo 309 del estatuto procesal, prescribe la oposición a la diligencia de entrega, reglas que son aplicables a la oposición al secuestro conforme el numeral 2 del artículo anteriormente citado.

*"ARTÍCULO 309. OPOSICIONES A LA ENTREGA. Las oposiciones a la entrega se someterán a las siguientes reglas:*

*1. El juez rechazará de plano la oposición a la entrega formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia, o por quien sea tenedor a nombre de aquella.*

*2. Podrá oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre. El opositor y el interesado en la entrega podrán solicitar testimonios de personas que concurren a la diligencia, relacionados con la posesión. El juez agregará al expediente los documentos que se aduzcan, siempre que se relacionen con la posesión, y practicará el interrogatorio del opositor, si estuviere presente, y las demás pruebas que estime necesarias.*

*3. Lo dispuesto en el numeral anterior se aplicará cuando la oposición se formule por tenedor que derive sus derechos de un tercero que se encuentre en las circunstancias allí previstas, quien deberá aducir prueba siquiera sumaria de su tenencia y de la posesión del tercero. En este caso, el tenedor será interrogado bajo juramento sobre los hechos constitutivos de su tenencia, de la posesión alegada y los lugares de habitación y de trabajo del supuesto poseedor.*

*4. Cuando la diligencia se efectúe en varios días, solo se atenderán las oposiciones que se formulen el día en que el juez identifique el sector del inmueble o los bienes muebles a que se refieran las oposiciones. Al mismo tiempo se hará la identificación de las personas que ocupen el inmueble o el correspondiente sector, si fuere el caso.*

*5. Si se admite la oposición y en el acto de la diligencia el interesado insiste expresamente en la entrega, el bien se dejará al opositor en calidad de secuestre.*

*Si la oposición se admite solo respecto de alguno de los bienes o de parte de estos, se llevará a cabo la entrega de lo demás.*

*Cuando la oposición sea formulada por un tenedor que derive sus derechos de un tercero poseedor, el juez le ordenará a aquel comunicarle a este para que comparezca a ratificar su actuación. Si no lo hace dentro de los cinco (5) días siguientes quedará sin efecto la oposición y se procederá a la entrega sin atender más oposiciones.*

*6. Cuando la diligencia haya sido practicada por el juez de conocimiento y quien solicitó la entrega haya insistido, este y el opositor, dentro de los cinco (5) días siguientes, podrán solicitar pruebas que se relacionen con la oposición. Vencido dicho término, el juez convocará a audiencia en la que practicará las pruebas y resolverá lo que corresponda.*

*7. Si la diligencia se practicó por comisionado y la oposición se refiere a todos los bienes objeto de ella, se remitirá inmediatamente el despacho al comitente, y el término previsto en el numeral anterior se contará a partir de la notificación del auto que ordena agregar al expediente el despacho comisorio. Si la oposición fuere parcial la remisión del despacho se hará cuando termine la diligencia.*

*8. Si se rechaza la oposición, la entrega se practicará sin atender ninguna otra oposición, haciendo uso de la fuerza pública si fuere necesario. Cuando la decisión sea favorable al opositor, se levantará el secuestro, a menos que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del auto que decida la oposición o del que ordene obedecer lo resuelto por el superior, el demandante presente prueba de haber promovido contra dicho tercero el proceso a que hubiere lugar, en cuyo caso el secuestro continuará vigente hasta la terminación de dicho proceso. Copia de la diligencia de secuestro se remitirá al juez de aquel.*

*9. Quien resulte vencido en el trámite de la oposición será condenado en costas y en perjuicios; estos últimos se liquidarán como dispone el inciso 3o del artículo 283.*

*PARÁGRAFO. Restitución al tercero poseedor. Si el tercero poseedor con derecho a oponerse no hubiere estado presente al practicarse la diligencia de entrega, podrá solicitar al juez de conocimiento, dentro de los veinte (20) días siguientes, que se le restituya en su posesión. Presentada en tiempo la solicitud el juez convocará a audiencia en la que practicará las pruebas que considere necesarias y resolverá. Si la decisión es desfavorable al tercero, este será condenado a pagar multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), costas y perjuicios. Dentro del término que el juez señale, antes de citar para audiencia, el tercero deberá prestar caución para garantizar el pago de las mencionadas condenas.*

*Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también al tercero poseedor con derecho a oponerse, que habiendo concurrido a la diligencia de entrega no estuvo representado por apoderado judicial, pero el término para formular la solicitud será de cinco (5) días.*

*Los términos anteriores correrán a partir del día siguiente al de la fecha en que se practicó la diligencia de entrega”.*

2.3. En relación con esta temática, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en diferentes pronunciamientos ha indicado que es necesario acreditar la condición de poseedor para alegar la oposición al secuestro, y que también podrá alegarla el tenedor a nombre del poseedor. En este sentido, en un caso similar señaló lo siguiente:

*"Así las cosas, estudiado el acervo probatorio allegado al plenario, concluyó que «se advierte la falta de claridad frente a la verdadera calidad en que el señor Toloza Rueda concurre al proceso; pues en ninguno de los apartes del escrito, el promotor de la oposición indica si viene al trámite en calidad de poseedor, en este caso, si ejerce una posesión conjunta con su padre el señor José Antonio Vecino Toloza, o si por el contrario, actúa en calidad de tenedor cuyo derecho lo deriva de su padre, al parecer quien dice tener la calidad de poseedor», agregando que dicha confusión surge del hecho que en el escrito de oposición presentado por Eduardo Toloza, hijo del aquí accionante, este afirmó que*

*«"lleva viviendo toda su vida junto con su padre (...)", y que "es poseedor en nombre de su señor padre y propio tras haber ejercido regular e*

*ininterrumpidamente (...) no clandestina, pacífica, ininterrumpida, conociéndose como propietario por más de cuarenta y ocho (48) años.”; que “tiene pleno derecho sobre la posesión material de los bienes por el reclamados”; es decir, no se logra identificar si la reclamación o defensa del derecho de posesión, lo reclama para sí o en favor de su señor padre, máxime cuando fue el mismo José Antonio Vecino Toloza quien durante la diligencia de secuestro, pese a que no formuló oposición alguna para defender su calidad respecto del inmueble objeto de la cautela, sí dejó constancia escrita en el acta de la actuación, de tener la calidad de poseedor y reservarse los derechos de así reclamarlo».*

*Por lo tanto, apuntaló que «si bien al sustentar la alzada el apelante endilga que, la juzgadora sesgó la interpretación del inciso tercero del artículo 309 del C.G.P., pues de allí se desprende la legitimación de los tenedores que deriven su derecho de un tercero poseedor para iniciar el incidente de oposición, lo cierto es que, dicha condición de tenedor con la que concurre al proceso, no subyace con la claridad que el caso requiere y reclama, de los supuestos facticos relatados en el escrito de oposición».*

*(...)*

*De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acción no tiene vocación de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporación, la decisión cuestionada no podría recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirviéndose de un análisis jurisprudencial y normativo del tema y de una valoración razonable de los medios de convicción (documentales y testimoniales).*

#### CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si la juez de primer grado tuvo razón al negar la oposición al secuestro formulada por C.I. Bodegas Alicante S.A.S., en tanto, concluyó que la opositora no acreditó la condición de poseedora sobre los bienes muebles objeto de la medida cautelar.

Al respecto, esta dependencia judicial considera que lo definido por la juez se encuentra ajustado a derecho, debido a que, tuvo razón al señalar que la sociedad opositora no demostró que ejercía actos de señora y dueña sobre los



bienes muebles secuestrados, pues se limitó a indicar que era propietaria de estos, sin tener en cuenta que los mismos no se encontraban en su poder, ello aunado a que la presunta propiedad alegada tampoco fue certificada, debido a que, el contrato de compraventa suscrito entre Disaypro S.A.S. (vendedor) y C.I. Bodegas Alicante S.A.S. no se cumplió a cabalidad, en el sentido de que, la sociedad vendedora no hizo entrega material de los bienes muebles vendidos a la compradora, pues así lo afirmó la opositora en el escrito de oposición así, *"CUARTO: Pese a que mi representada C.I. Bodegas Alicante S.A.S. efectuó los pagos contenidos en el contrato, la vendedora Disaypro Diseño y Desarrollo de Proyectos S.A.S. no ha terminado el ensamblaje de las máquinas ni ha hecho entrega alguna de los bienes que fueron objeto del contrato"*.

Adicionalmente, la recurrente adjuntó al escrito de oposición un contrato de leasing suscrito con el Banco de Occidente, el cual tenía como objeto unos bienes muebles determinados por su nombre, marca y año de fabricación, sin embargo, tal documento tampoco tiene la vocación de demostrar la presunta posesión alegada por la opositora, pues como bien lo estimó la juzgadora de primer nivel, el contrato de leasing solamente otorga la tenencia de la cosa, pues la propiedad está en cabeza de la entidad financiera, hasta tanto, la sociedad locataria ejerza la opción de compra, situación que en este caso no quedó demostrada.

Por otra parte, del interrogatorio absuelto por la representante legal de C.I. Bodegas Alicante S.A.S. se logra inferir que el poder sobre los bienes muebles objeto de la medida cautelar de secuestro, no lo ostentaba la opositora, sino la sociedad demandada y así también se consignó en el escrito de oposición *"QUINTO: Actualmente, los bienes descritos que se encuentran en poder de Disaypro Diseño y Desarrollo de Proyectos S.A.S., en razón del contrato suscrito, pertenecen realmente a C.I. Bodegas Alicante S.A.S., quienes efectivizaron, como ya se refirió, los pagos por concepto de adquisición de maquinaria"*.

Así las cosas, es de advertir que la opositora no acreditó actos de posesión respecto de los bienes muebles secuestrados, pues no logró certificar que estos se encontraban en su poder, ni la manera en que los explotaba económicamente o cuál era la utilidad que recibía, tampoco probó quién era el encargado del mantenimiento de los mismos, y de conformidad con los medios suatorios practicados se llegó a la convicción de que efectivamente la posesión de tales muebles no era ejercida por la opositora, quien en sus alegaciones se limitó a tratar de demostrar la propiedad de los objetos secuestrados,

circunstancia que no es suficiente para que prospere la oposición formulada, máxime que ni siquiera la propiedad en cabeza de C.I. Bodegas Alicante S.A.S. se logró acreditar.

En relación con los argumentos expuestos por la parte recurrente es de advertir que los mismos no dan al traste con la decisión impugnada, debido a que, para el efecto no es relevante determinar si los bienes muebles secuestrados son de propiedad o no de Disaypro S.A.S., pues el objeto del presente incidente es determinar si sobre estos, se ejerce una posesión por parte de un tercero ajeno al proceso, circunstancia que aquí no fue demostrada. De igual modo, en lo atinente al contrato de compraventa suscrito con Disaypro S.A.S., debe indicarse que en virtud de este tampoco se probó los actos de posesión, en especial porque la misma opositora afirmó que aquel había sido incumplido por Disaypro, por lo cual los bienes se encontraban en cabeza de esta sociedad y no de la opositora. Finalmente, es de advertir que con independencia de que exista coincidencia o no entre los bienes muebles reclamados en oposición y los efectivamente secuestrados, lo relevante en este asunto es demostrar los actos de posesión respecto de estos, situación que no fue acreditada.


En consecuencia, el auto de 10 de noviembre de 2022 proferido por el Juzgado 009 Civil del Circuito de Medellín, será confirmado.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en auto de 10 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado 009 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. Se condena en costas a la parte recurrente y como agencias en derecho se fija la suma de 1 SMLMV.

NOTIFÍQUESE

  
MARTHA CECILIA LEMA VILLADA  
Magistrada